

ORDEN

Exp.: A/SER-009538/2023

ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO, POR LA QUE SE ACUERDA LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE INFORMES DE ANÁLISIS ECONÓMICO, COMPETENCIA Y REGULACIÓN DEL MERCADO Y MEJORA DEL CLIMA DE NEGOCIOS

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero: El 27 de marzo de 2023 se acordó el inicio del expediente de contratación para la adjudicación del contrato de servicios denominado SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE INFORMES DE ANÁLISIS ECONÓMICO, COMPETENCIA Y REGULACIÓN DEL MERCADO Y MEJORA DEL CLIMA DE NEGOCIOS con un presupuesto de licitación del contrato de 229.590,24 euros.

Segundo: Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que habían de regir la adjudicación y ejecución del contrato por procedimiento abierto y pluralidad de criterios fueron aprobados mediante Orden de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de fecha 15 de junio de 2023.

Tercero: Por Orden de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de fecha 30 de agosto de 2023, se adjudicó a la empresa PENINSULA INCORPORATE INNOVATION S.L. el contrato de servicios mencionado anteriormente, con un plazo de ejecución de 24 meses desde la firma del contrato y por un importe total de 172.217 euros (IVA incluido), y los siguientes precios unitarios:

Objeto	Cantidad prevista	Precio unitario sin IVA	Base imponible informes previstos	Importe IVA	Importe total
Informe ejecutivo	20	1.859,09	37.181,80	7.808,18	44.989,98
Informe detallado	10	4.507,76	45.077,60	9.466,30	54.543,90
Informe extenso	5	12.013,74	60.068,70	12.614,42	72.683,13
Total			142.328,10	29.888,90	172.217,00

Cuarto: El contrato se formalizó el 28 de septiembre de 2023, y para responder del cumplimiento del mismo el adjudicatario constituyó garantía definitiva mediante seguro de caución por importe de 9.487,20 euros en la Tesorería de la Comunidad de Madrid (resguardo de depósito nº 202355004656D, de fecha 25 de junio de 2023).

Quinto: El objeto del contrato es la elaboración, a requerimiento de la Dirección General competente en materia de economía, de informes de análisis económico, análisis de mercado, impacto económico y regulatorio, competencia y unidad de mercado, mejora del clima de negocios.

Sexto: En la cláusula 1, apartado 4, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se establece que el Presupuesto se determina en una cuantía máxima estimada, estando previsto inicialmente la realización de 35 informes, de diversa tipología, pudiendo aumentar o disminuir las unidades previstas de cada uno de ellos hasta el límite del presupuesto.

Asimismo, en el apartado 24 de la cláusula 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en relación con la forma de pago, se establece que, en caso de no realizarse el número de los informes previstos, solo se pagarán los informes realizados, no existiendo la obligación de agotar el importe total del precio del contrato.

Séptimo: En ejecución del contrato formalizado se han encargado 2 informes por la Dirección General de Economía que han sido ejecutados de conformidad por la empresa contratista habiéndose facturado y abonados los mismos tras la tramitación de las correspondientes propuestas de pago (documento contable OK/2023/0000694273 por importe de 2.249,50 € y documento contable OK/2024/0000322633 por importe de 14.535,73 €), alcanzando el importe total de 16.785,23 los trabajos realizados de conformidad y abonados a la empresa, no quedando pendiente liquidación alguna a favor del adjudicatario.

Octavo: La Dirección General de Economía, con fecha 14 de junio de 2024, propone la rescisión por mutuo acuerdo del contrato de servicios denominado SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE INFORMES DE ANÁLISIS ECONÓMICO, COMPETENCIA Y REGULACIÓN DEL MERCADO Y MEJORA DEL CLIMA DE NEGOCIOS suscrito con la empresa PENINSULA INCORPORATE INNOVATION S.L. el 30 de agosto de 2023, ante la escasez de encargos de Informes objeto del contrato y por motivos económicos de interés público que hacen innecesario la permanencia del contrato y la asignación al mismo de los recursos disponibles, señalando la inexistencia de responsabilidades ni incumplimientos imputables al contratista o a la Administración que pudieran motivar la incautación de la garantía depositada ni indemnización alguna a favor del contratista.

Noveno: Mediante Orden del Órgano de contratación de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de fecha 25 de junio de 2024 se acordó el inicio del expediente de resolución del contrato de servicios denominado "SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE INFORMES DE ANÁLISIS ECONÓMICO, COMPETENCIA Y REGULACIÓN DEL MERCADO Y MEJORA DEL CLIMA DE NEGOCIOS" suscrito con la empresa PENINSULA INCORPORATE INNOVATION S.L. el 30 de agosto de 2023, conforme a la propuesta formulada por la Dirección General de Economía al amparo de lo dispuesto en el artículo 211.1.c) de la LCSP.

Décimo: Mediante escrito de fecha 25 de junio de 2024 se comunicó al contratista el inicio del expediente de resolución del contrato, adjuntándose a dicha comunicación copia de la Propuesta de Resolución de la Dirección General de Economía y de la Orden de inicio del expediente de Resolución, concediéndosele trámite de audiencia, por un plazo de 10 días.

Decimoprimer: En contestación a la comunicación recibida el representante legal de la empresa contratista mediante escrito de fecha 17 de julio de 2024 manifiesta su conformidad con la propuesta de resolución remitida.

Decimosegundo: Con fecha 17 de octubre de 2024 se remitió el expediente de resolución del contrato a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid que ha emitido informe favorable de fecha 30 de octubre de 2024.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero: El artículo 190 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, que recoge las prerrogativas de la Administración establece : “[...] *el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de esta.*”

Segundo: El artículo 191 de la Ley de Contratos del Sector Público establece que en los procedimientos que se instruyan para la adopción de los acuerdos relativos a las prerrogativas establecidas en el artículo anterior, deberá darse audiencia al contratista.

Tercero: El artículo 211.1 c) de la LCSP señala entre las causas de resolución del contrato, el mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista.

Cuarto: De conformidad con lo previsto en el artículo 212.4 de la LCSP la resolución por mutuo acuerdo solo podrá tener lugar cuando no concurra otra causa de resolución que sea imputable al contratista, y siempre que razones de interés público hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.

De esta forma, de conformidad con lo establecido en el dicho precepto, para la resolución por mutuo acuerdo, no basta con la mera voluntad de las partes, sino que deben concurrir los dos requisitos citados:

a) Que no concurra otra causa de resolución imputable al contratista. Como dice el Consejo de Estado en su Dictamen 1022/1992, de 17 de septiembre, tal requisito para poder resolver por mutuo acuerdo tiene por finalidad evitar una hipotética o eventual desviación de poder, que podría consistir en sanar el incumplimiento del contratista o en liberarle de las consecuencias onerosas que de él pudieran seguirse. En el caso de nos ocupa se cumple con este requisito puesto que tiene lugar:

1. La no existencia de otra causa de resolución concurrente imputable a la empresa PENINSULA CORPORATE INNOVATION S.L, habiendo esta prestado el servicio conforme a los pliegos del contrato.
2. La causa de resolución no es el incumplimiento del contratista, dado que no existe, a día de hoy, incumplimiento alguno de la citada empresa en la prestación del servicio.

b) que existan razones de interés público que hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.

Como nos dice el dictamen del Consejo de Estado 55.008/1990 de 14 de julio deben concurrir circunstancias que permitan concluir que parece “innecesaria o inconveniente” la permanencia del contrato. Los órganos consultivos han llegado a considerar que el interés público no demandaba la permanencia de un contrato cuando la paralización de las obras fue consecuencia de la inadecuación del proyecto mismo y cuando el contratista aceptó la propuesta de liquidación formulada por la administración contratante (Dictamen del Consejo de Estado N.º 55.008/1990 de 14 de julio). También ha informado el Consejo de Estado que es perfectamente comprensible que una ajustada valoración del interés público pueda respaldar no solo la conveniencia de resolver el contrato, sino también la de hacerlo por mutuo

acuerdo, atribuyendo una mayor eficacia expeditiva a tal acuerdo y resaltando incluso su utilidad preventiva de incidentes y controversia (Dictamen N.º 1022/1992 de 17 de septiembre).

Adicionalmente, se recuerda, como indica la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón 8/2013, de 10 de abril, que la innecesaridad o inconveniencia debe serlo del contrato no del servicio objeto del contrato, como sucede en este caso.

A mayor abundamiento, la renuncia, por motivos de interés público, implica la no realización de la prestación objeto de la licitación, por resultar innecesaria o no ser conveniente. Así lo advierte la STJUE de 11 de diciembre de 2014, *Croce Amica One Italia Srl*, que recuerda que la normativa europea no establece que la renuncia del poder adjudicador a adjudicar un contrato público se limite a casos excepcionales, o se base necesariamente en motivos graves. En todo caso, por razones de transparencia, sí se obliga a la entidad adjudicadora a comunicar, en el caso de que decida cancelar la licitación, los motivos de su decisión a los candidatos y a los licitadores, lo que no implica que la entidad adjudicadora esté obligada a llevar a término el procedimiento de adjudicación.

Tal y como recuerda el Acuerdo 32/2016, de 29 de marzo de 2016, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón: *“(...) El órgano de contratación, desde el mismo momento en que se plantea la posibilidad de renunciar al contrato, porque entiende que concurren motivos de interés público económicos (...), los cuales tienen su fundamento en principios de actuación administrativa —como la eficiencia del gasto público, la consecución de objetivos al menor coste posible, o la proporcionalidad conforme a la cual la medida a adoptar ha de ser adecuada al fin que la justifica y equilibrada—, derivándose para el interés general unos beneficios superiores con la renuncia, a los inconvenientes que comporta; se plantea también fundamentar su ejercicio en razones de interés público. (...) El interés público asume un papel fundamental como cláusula de habilitación para el ejercicio de potestades públicas, en especial cuando la Administración, en este caso el órgano de contratación, debe desarrollar funciones que comprometen el cumplimiento de otras necesidades que también debe atender”.*

Confluyen en este caso, motivos de interés público de carácter económico ya que la rescisión por mutuo acuerdo del contrato permitirá una gestión más eficiente del gasto adecuándolo a la demanda real de asesoramiento externo que pueda existir en esta Dirección General ya que la estimación realizada en el momento de la licitación excede las necesidades por lo que, en este momento, resulta innecesario el mantenimiento del contrato.

Por las razones anteriores que se dan en el caso que no ocupa, no es adecuado ni viable por razones de interés público el mantenimiento de este contrato de asistencia técnica, por lo que es preciso proceder a la resolución contrato.

Quinto: En cuanto a los efectos de la resolución, el artículo 213 de la LCSP establece en su párrafo 1 que cuando la resolución se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de las partes se acomodarán a lo válidamente estipulado por ellas.

El alcance de dicha regla general es que, como indica el informe de la Junta Consultiva de Aragón 8/2013, de 10 de abril, las consecuencias jurídicas o económicas por mutuo acuerdo serán las que libremente fijen las partes, dentro del respeto en todo caso del ordenamiento jurídico y a los principios básicos de eficiencia, buena administración y prohibición del enriquecimiento injusto. Es decir, está sometido a los límites establecidos para cualquier pacto en la contratación pública en el art. 34 LCSP, que permite concertar los pactos, cláusulas y condiciones que se tengan por convenientes, siempre y cuando no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico o a los principios de buena administración

Sexto: El párrafo 5 del artículo 213 de la LCSP señala que, en todo caso, el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía que, en su caso, hubiese sido constituida.

En el presente contrato no debe producirse la pérdida de la fianza constituida, al no existir culpa o incumplimiento alguno del contratista.

De acuerdo con lo anterior y al haber quedado acreditado el mutuo acuerdo de las partes en la resolución y liquidación del contrato, en virtud de lo que establece el artículo 211.1 c) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes,

DISPONGO

Primero: Resolver el contrato de servicios denominado SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE INFORMES DE ANÁLISIS ECONÓMICO, COMPETENCIA Y REGULACIÓN DEL MERCADO Y MEJORA DEL CLIMA DE NEGOCIOS, adjudicado por el órgano de contratación con fecha 30 de agosto de 2023 a PENINSULA INCORPORATE INNOVATION S.L. por un importe total de 172.217,00 euros, IVA incluido, por mutuo acuerdo de las partes.

Segundo: Acordar la devolución de la garantía definitiva constituida por el contratista mediante seguro de caución para responder de las obligaciones del contrato por importe de 9.487,20 euros en la Tesorería de la Comunidad de Madrid con resguardo de depósito nº 202355004656D, de fecha 25 de julio de 2023.

Tercero. Aprobar la liquidación total del contrato por importe de 16.785,23 euros, sin que exista saldo a favor del contratista ni incremento sobre el precio del contrato.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse con carácter potestativo recurso de reposición en el plazo un mes, ante el mismo órgano que lo ha dictado, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ambos plazos contados desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente interponer. Todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

LA CONSEJERA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
P.D. EL VICENCONSEJERO DE ECONOMÍA Y EMPLEO
Orden de 17 de abril de 2024 (BOCM 07/05/2024)

Firmado digitalmente por: RODRÍGUEZ ASENSIO DANIEL
Fecha: 2024.12.12 10:15

PENINSULA INCORPORATE INNOVATION S.L